

**VENEZUELA: IZQUIERDA,
POPULISMO Y DEMOCRACIA
EN TIEMPOS DE CHÁVEZ**

MANUEL HIDALGO TRENADO

Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Ciencia Política y Sociología

Documentos de Trabajo
POLÍTICA Y GESTIÓN

EDITA

Universidad Carlos III de Madrid
Instituto "Fermin Caballero" de Política y Gobernanza
Departamento de Ciencia Política y Sociología
Área de Ciencia Política y de la Administración

CONSEJO EDITORIAL

José Ignacio Cases Méndez
Ester García Sánchez
Manuel Hidalgo Trenado
Eduardo López-Aranguren Quiñones
Antonio Natera Peral
Javier Redondo Rodelas
Constanza Tobío Soler
Francisco J. Vanaclocha Bellver
Verónica Viñas Chiappini
Isabel Wences Simón

Documentos de Trabajo Política y Gestión en internet:
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/CPS/CPS_public.html

Distribución gratuita, salvo ediciones especiales.

Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Ciencia Política y Sociología
Campus de Getafe
Calle Madrid, nº 126
28903 MADRID
Tfno.: 916245821 – Fax: 916249574
Correo electrónico: politicaygestion@uc3m.es

Depósito Legal: M-18072-2009
ISSN:1698-2894

Diseño: Roberto Losada Maestre

Imprime:
Copy Red S.A.
Avda. de Fuenlabrada, 97
28912 Leganés (Madrid)

DOCUMENTOS DE TRABAJO “POLÍTICA Y GESTIÓN”

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

INSTITUTO “FERMÍN CABALLERO”

DE POLÍTICA Y GOBERNANZA

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA

ÁREA DE CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

Documento de Trabajo nº 13/2008

**VENEZUELA: IZQUIERDA, POPULISMO Y DEMOCRACIA
EN TIEMPOS DE CHÁVEZ¹**

MANUEL HIDALGO TRENADO²

Palabras clave: Hugo Chávez, Venezuela, populismo, izquierda, democracia.

Abstract: The rise of Hugo Chávez to power in 1999 has brought fundamental political changes and socioeconomic transformations to Venezuela. The main goal of this paper is to briefly analyze a socio-

¹ Ponencia preparada para el Coloquio Internacional “Gobiernos de Izquierda en Iberoamérica en el Siglo XXI”, Xalapa (Veracruz), 20-22 de octubre de 2008.

² Profesor del departamento de Ciencia Política y Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid.

political process so *sui generis* and contradictory that goes against Latin American progressive experiences. Although the elites have appealed to the establishment of a socialist model from 2004 on, Chávez's Government is not a leftist one. It can be better conceptualized as a (neo) populism that combines old-fashion radical ideas with democratic, authoritarian, militarist, and personalist characteristics. While some improvements of the socioeconomic conditions of the lower classes and the introduction of innovative local sociopolitical instruments can not be denied, at the same time it must be highlighted the deterioration of liberal and representative principles and institutions. Moreover, the exercise of some rights and liberties has worsened and democracy has been hindered by a highly polarized political environment. In addition, doubts remain about the building of a new economic development since the elites have exacerbated a rentier model. In sum, there is not evidence that the *chavistas* are constructing a new democratic socialism. Because the current political project depends heavily on the leadership of the President and the income provided by petroleum, the so called "21st Century Socialism" is highly vulnerable and its export to other countries of the region unlikely.

ÍNDICE

Introducción	4
El chavismo llega al poder	5
De la revolución bolivariana al <i>socialismo del siglo xxi</i>	7
Elecciones y partidos.....	9
Naturaleza y mecánica del régimen.....	13
Recentralización del poder y empoderamiento de las comunidades..	17
Alcances y límites de la gestión gubernamental	21
<i>¿Un nuevo modelo de desarrollo productivo?</i>	25
<i>El giro en política exterior</i>	26
Consideraciones finales	30
Referencias.....	33

INTRODUCCIÓN

El acceso al poder de Chávez en Venezuela no constituye un hecho aislado en Latinoamérica sino que pertenece a la ola populista que resurge con fuerza durante los 1980s y 1990s. Los populismos regresan en gran parte debido al descrédito de las políticas económicas que fueron aplicadas conformes a los lineamientos del “Consenso de Washington” y que hundieron a millones de personas en la miseria. No obstante, los nuevos regímenes, a diferencia del período 1930-1960, presentan ciertos rasgos novedosos, de ahí que sean denominados en muchos casos neopopulismos. Esta etapa alcanzará su cenit durante los períodos de gobierno de Carlos Menem, Fernando Collor de Mello, Alberto Fujimori y Abdalá Bucaram. Para algunos estudiosos, los casos posteriores de Lucio Gutiérrez, Lino Oviedo y Hugo Chávez constituyen manifestaciones militares de tal fenómeno (Conniff 2003: 32-33).

Sin embargo, el caso venezolano es más complejo de lo apuntado por Conniff ya que, aunque el rasgo militar es fundamental, hay otros elementos de la alianza socio-política gobernante que deben tomarse en cuenta. En un primer momento, la coalición de apoyo a Chávez estará compuesta no sólo por militares, también por grupos de la vieja y minoritaria izquierda radical y otros sectores provenientes de varios partidos del *status quo*. Asimismo, le respaldarán grupos de clase media e intelectuales. Posteriormente, con la radicalización del proceso, perderá apoyos entre ciertos grupos de poder y los estratos medios. Por tanto, no resulta fácil clasificar el régimen debido a los cambios que se han producido en la alianza cívico-militar que le respalda y la evolución del proyecto en el tiempo. Además, se entretrejen relaciones entre populismo, izquierda y democracia que impiden clasificarlo como un mero neopopulismo militar.

En este trabajo, se describen la naturaleza y mecánica del régimen político venezolano, se examinan algunas de las características fundamentales de la evolución sociopolítica del país y se explican sintéticamente varias políticas significativas aplicadas durante el período 1999-2008. El objetivo es mostrar los alcances y límites de un proceso sociopolítico contradictorio y *sui géneris* que marcha a contracorriente de otras experiencias progresistas en América Latina. Aunque el proceso de cambios se ha radicalizado a partir de 2004 —se persigue implantar un nuevo modelo socialista— el Gobierno de Hugo Chávez no es propiamente de izquierdas. Es un populismo que combina de manera muy particular elementos de la *vieja* izquierda con otros democráticos, autoritarios y militaristas, esto último no en el sentido clásico sino en propugnar la convergencia de los sectores civil y militar. Durante estos casi diez años el Ejecutivo ha introducido algunas innovaciones político-institucionales interesantes en el ámbito local y aplicado medidas que han reportado importantes beneficios socioeconómicos a los sectores populares, pilar social del *chavismo*. No obstante, el balance desde una perspectiva democrático-liberal arroja más sombras que luces. Además, no existen evidencias de que se esté construyendo un socialismo democrático novedoso sino que se está produciendo una involución en términos de gobernación democrática. Por último, el caso venezolano es tan singular que no pareciera exportable a otros países de la región. Ahora bien, aunque su influencia es limitada, no es desdeñable.

EL CHAVISMO LLEGA AL PODER

El triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de diciembre de 1998 obedece a la crisis de legitimidad, representación y rendimiento del modelo de *Punto Fijo*, vigente durante cuatro décadas (1958-1998). Si bien las principales élites del país mediante acuerdos y pactos habían consolidado un régimen liberal-democrático y aplicado políticas que generaron amplios beneficios socioeconómicos entre la población hasta finales de los setenta, con el transcurso del tiempo el modelo sociopolítico devino en excluyente para la gran mayoría de la población. Aunque a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa

se adoptan reformas económicas y políticas que introducen cambios significativos en múltiples órdenes, éstas fueron insuficientes para revertir el declive político y el deterioro socioeconómico (Kornblith 2003: 379). Más bien en algunos ámbitos se agravaron los problemas debido a que la década de los noventa estuvo dominada por fuertes tensiones y conflictos sociopolíticos que afectaron gravemente a la gobernabilidad del régimen y las condiciones de vida de los venezolanos. Un estallido social en 1989, dos intentos de golpe de Estado en 1992 (el primero de ellos liderado por el entonces teniente coronel Hugo Chávez), la destitución del Presidente Pérez en mayo de 1993 y la crisis bancaria de 1994-1995, por citar sólo algunos de los eventos más destacados, dan cuenta de la profundidad de la crisis y los problemas de estabilidad que enfrentó el sistema democrático venezolano.

Para las elecciones de 1998, el empeoramiento de los problemas socioeconómicos se unió a una coyuntura política en la que los grandes partidos cometieron importantes errores, facilitando con ello la victoria de un *outsider*, Hugo Chávez. Éste, tras su breve paso por prisión, supo aglutinar en torno a su candidatura a muchos de los descontentos. Las encuestas de entonces corroboran las altas expectativas generalizadas que existían sobre la posibilidad de que el nuevo Presidente pudiese establecer un orden más democrático, capaz de generar mayor bienestar e igualdad sociopolítica. Los cambios en los valores, las normas y las instituciones del sistema político, plasmados en la Constitución de 1999, junto con el desplazamiento de las viejas élites políticas y el nuevo diseño político-institucional del régimen, permiten hablar de una auténtica *revolución* política. Sin duda el liderazgo, la legitimidad y popularidad de aquél, en particular entre los sectores populares, han sido fundamentales para impulsar los cambios desde entonces.

DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA AL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

En general, y a riesgo de simplificar en exceso, se pueden distinguir tres grandes etapas sociopolíticas durante estos últimos diez años. La primera fase gira en torno a la principal propuesta de Chávez: la convocatoria de una Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución de 1999. En el nuevo texto constitucional se acepta la economía de mercado y se propugna un nuevo tipo de democracia que, en principio, otorga mayor relevancia a la participación ciudadana frente a los mecanismos representativos (democracia “protagónica y participativa”). Durante los primeros años, el proceso de cambios será denominado genéricamente “Revolución Bolivariana”, en clara alusión a adhesión, en un sentido muy amplio, a las ideas del prócer de la Independencia.

Una segunda etapa se extiende desde las elecciones relegitimadoras de cargos representativos del año 2000, conforme a la nueva Constitución, hasta el referéndum revocatorio presidencial de agosto de 2004. En particular a partir del año 2001 se inicia un período turbulento marcado por la polarización política. Los conflictos en torno a la aplicación de la agenda gubernamental, que rompía consensos previos y modificaba el *status quo*, dejan una profunda huella en el país. Entre otros hechos, destacan un fallido golpe de Estado (abril de 2002), un fracasado paro económico-petrolero, que se prolonga durante 63 días a partir de diciembre de 2002, y un referéndum revocatorio presidencial (agosto de 2004). Éste último fue utilizado como último recurso por la oposición para echar a Chávez del poder, luego de que otras vías (unas legales, otras no) se hubiesen mostrado inefectivas.

El triunfo del Presidente en el referéndum inaugurará una tercera fase que se prolonga hasta la actualidad. Se radicalizarán los cambios, en particular tras la amplia victoria obtenida en las elecciones presidenciales de 2006 por Chávez. Éste interpretará su victoria como un respaldo a su propuesta de instaurar el socialismo, denominado *Socialis-*

mo del Siglo XXI — también conocido como “Socialismo bolivariano” —.

Hasta la fecha tal socialismo no ha pasado de ser un eslogan. Es un término muy vago e impreciso que alude al deseo de construir un nuevo modelo socialista, alejado de los vicios y errores de los esquemas fracasados del siglo XX. Sus defensores se han encargado de subrayar las múltiples influencias que reciben. Desde el denominado árbol de las tres raíces (Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora) hasta la interpretación socialista de diversos eventos y autores, pasando por corrientes cristianas y marxistas. Sin embargo, la ausencia de elaboración teórica e ideológica, las incoherencias y la falta de concreción empírica son las características dominantes que intentan disimularse recurriendo a la propaganda y al abultado ingreso petrolero recibido en los últimos años (Guerra 2007).

Aun así, el socialismo sigue constituyendo una referencia en los planes del oficialismo. Después de las elecciones presidenciales de 2006, destacan los siguientes aspectos programáticos: i) democracia protagónica y revolucionaria, insistiéndose en la necesidad de construir el poder popular, ii) modelo productivo socialista. Se defiende el control estatal de los sectores estratégicos de la economía. Además, se impulsan formas económicas alternativas: empresas de producción, cogestión, cooperativas y núcleos de desarrollo endógeno. Igualmente, se defiende un sistema más incluyente socialmente, una nueva ética socialista y un nuevo modelo de desarrollo territorial desconcentrado. Por último, en el ámbito internacional se propone convertir a Venezuela en una potencia energética y se apoya la creación de un orden internacional multipolar generador de justicia social, solidaridad y paz social (República Bolivariana de Venezuela 2007).

ELECCIONES Y PARTIDOS

Desde 1998 el chavismo ha ganado todos los procesos electorales con excepción del referéndum constitucional de 2007. El liderazgo de Hugo Chávez, algunas de sus medidas económicas y sociales y el despliegue de un extensivo clientelismo permiten entender sus amplios apoyos, en particular entre los sectores populares que constituyen la mayoría de la población. Adicionalmente, el ventajismo oficial, la movilización de empleados públicos y el uso de ciertas prácticas coactivas e intimidatorias también han jugado cierto papel en la participación de los electores en distintos momentos. En las últimas elecciones presidenciales de 2006, Hugo Chávez fue reelegido con un triunfo abrumador: 62,85% de los votos frente al 36,91% del candidato de la oposición, Manuel Rosales. Un año antes, en 2005, el oficialismo también se hizo con el control hegemónico de la Asamblea Nacional tras renunciar en el último momento la oposición, alegando falta de garantías sobre el secreto del voto. Esta acción ha sido muy costosa para su proyección y capacidad de actuación como los hechos han mostrado con posterioridad.

También en el ámbito regional y local el chavismo ganando mayores espacios de poder desde que accedió al poder. Como se ha puesto de manifiesto en distintos procesos electorales, el liderazgo del Presidente es fundamental para la suerte de la gran mayoría de los candidatos *chavistas*, si bien en algunos casos hay que considerar factores de carácter sub-nacional. Así por ejemplo, meses antes de las elecciones regionales y locales de 2004, Chávez había obtenido un importante triunfo en el referéndum presidencial revocatorio, y eso tuvo unos efectos políticos claros en dichos comicios: obtuvo la gran mayoría de gobernaciones y alcaldías. Bien es cierto que en los resultados igualmente influyeron la división de la oposición sobre la conveniencia de participar en las elecciones y la desmovilización de muchos ciudadanos, desconfiados de la autoridad y el sistema electorales. En el referéndum, la oposición alegó un fraude con las máquinas de votación

que nunca demostró y eso repercutió posteriormente en su más limitada capacidad de movilización de votantes hasta 2006.

El oficialismo ha presentado los procesos electorales como momentos de gran confrontación político-electoral. Chávez les ha otorgado un carácter plebiscitario que ha sido bastante eficaz para lograr repetidas victorias. Por otro lado, las tasas de abstención han fluctuado durante el período 1998-2007. En general, éstas se han ubicado por encima del 35%. Obviamente, la participación ha sido inferior en elecciones parlamentarias, regionales y locales, que en las presidenciales (25,3% de abstención en las del 2006) o en algún referéndum decisivo para la suerte del Presidente (30,08% abstención en el referéndum revocatorio presidencial de 2004). Aunque han sido muchos los procesos electorales del período 1998-2007, a riesgo de simplificar y obviando ciertos aspectos coyunturales, tres factores, provenientes del pasado, explican gran parte las altas tasas de abstención: la insatisfacción con el funcionamiento del sistema político venezolano, la erosión de las lealtades partidistas y la ausencia de sanciones en caso de no votar (Molina y Pérez 1995; Pérez Baralt 2000).

Aunque Chávez cuenta con amplios apoyos, desde las elecciones del año 2000 han sido constantes las críticas y denuncias por sectores opuestos al Gobierno sobre irregularidades en los procesos electorales y la desigualdad de recursos con que oficialismo y oposición enfrentan los comicios. Así, por ejemplo, se acusa al Consejo Nacional Electoral (CNE) de parcialidad, el registro electoral se considera poco fiable, la “carnetización” masiva de ciudadanos, en ocasiones fuera de los plazos legales, como por ejemplo con anterioridad al referéndum revocatorio presidencial, es vista con sospechas. A ello se suma un sistema de votación denunciado por no garantizar el secreto al voto, algo que no ha podido demostrarse. Igualmente, en algunas coyunturas se ha criticado la utilización de mecanismos disuasorios para votar como las máquinas captahuellas y el uso de instrumentos de discriminación política y coacción, entre ellos las listas con datos de los electores, listas Tascón y Maisanta, elaboradas por los oficialistas en 2004.

Por último, la movilización de funcionarios públicos y el ventajismo oficial han sido dos rasgos muy visibles durante las campañas electorales.

Algunos autores a partir de los problemas que se observan en los comicios consideran que las elecciones venezolanas no son libres y equitativas (Kornblith 2007). Tal apreciación parece algo extrema. Las misiones de observación electoral internacionales han validado los comicios aunque es cierto que han destacado la existencia de ciertas irregularidades. Además, una organización poco afin al Gobierno como *Freedom House* define Venezuela como una “democracia electoral” (2007). El diagnóstico de estas organizaciones pareciera acertado: los comicios han sido aceptables, no puede hablarse de fraude por más que ciertos factores hayan incidido en el comportamiento de algunos sectores de la población. Además, las fallas e irregularidades no pueden pasar por alto el hecho de que el *chavismo* es mayoritario socialmente. Basta revisar estudios de opinión y las encuestas más importantes —algo en verdad no exento de cierta dificultad— para comprobar la popularidad del Presidente y la intención de voto a su favor y/o de candidatos oficialistas. Por tanto, en términos generales, hasta 2007 no se ha producido una alteración de la voluntad del cuerpo electoral. Sí puede argumentarse que las irregularidades y el desequilibrio de medios entre el Ejecutivo y la oposición (Corrales y Penfold-Becerra 2007) muestran el progresivo deterioro y la baja calidad de los procesos electorales.

Una de las características de este período es la debilidad de los partidos políticos que hunde sus raíces en décadas anteriores. Durante los años noventa se agudizó la crisis de los partidos y avanzó la desestructuración del sistema de partidos gracias al fomento de la antipolítica por algunos sectores y la personalización de los procesos políticos. A ello también contribuyó, en parte, el proceso descentralizador iniciado en 1989. El *chavismo* tanto por concepción como para evitar la acusada partidización de las instituciones y la vida política durante el período anterior no constitucionalizará los partidos políticos como tal. De hecho, la Constitución de 1999 se refiere a ellos como “organiza-

ciones con fines políticos”. Además, prohíbe su financiación pública. Por tanto, a la herencia del período anterior se suma la visión política de la nueva élite que limita mucho el fortalecimiento de auténticos partidos.

Chávez llega al poder con el apoyo de un movimiento político-electoral, el Movimiento V República (MVR). Éste ha sido ante todo una maquinaria para ganar elecciones. Con el fin de ganar más apoyos y transmitir una imagen de amplitud, esta fuerza ha entablado alianzas y acuerdos con otras organizaciones políticas de izquierda minoritarias. Entre estas pueden destacarse Patria para Todos (PPT), el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Por la Democracia Social (Podemos) — esta última organización se pasó a la oposición en 2007, al estar en desacuerdo cómo se planteó la reforma constitucional y algunos temas de fondo —. Después de las elecciones de 2006, Chávez disolvió el MVR y propuso crear una gran fuerza de izquierdas que aglutinara a todos los sectores que le apoyan con el fin de impulsar transformaciones radicales de mayor calado. Así surgió el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que sólo en la primavera de 2008 comenzó a dotarse de cierta institucionalidad. Fuerzas con el PPT y PCV decidieron no disolverse y mantener su autonomía dentro de la alianza oficialista.

En la oposición, Un Nuevo Tiempo (UNT) y Primero Justicia (PJ) son los principales partidos políticos. Ambas pueden adscribirse en términos generales a la socialdemocracia y el socialcristianismo que durante varias décadas representaron fuerzas históricas hoy muy disminuidas, Acción Democrática (AD) y Copei. UNT y PJ surgieron como organizaciones regionales (Estado Zulia y la capital del país, respectivamente) que progresivamente se han extendido por otras zonas aunque todavía distan de tener una estructura organizativa bien implantada en todo el país. Mientras que la primera cuenta con unas bases de apoyo de extracción popular, PJ es más fuerte entre los sectores urbanos de las clases media y alta. No obstante, en los últimos años ha extendido sus actividades a barriadas populares. Aunque ambas fuerzas cuentan con liderazgos emergentes, tienen importantes carencias

organizativas y programáticas. Además, todavía no han elaborado un proyecto de gobierno capaz de erosionar las bases de apoyo del *chavismo* o ganar gran parte del voto de los más sectores moderados e independientes, los denominados “NI-NI”.

Existen otros partidos en las filas opositoras pero son muy minoritarios y contribuyen a su gran fragmentación. De hecho, en algunas coyunturas la “unidad” se ha logrado no tanto en forma pro-activa sino como consecuencia de rechazo al Presidente y sus medidas. Durante varios años de agudo conflicto sociopolítico, grupos de la sociedad civil y grupos de interés, como sindicatos y organizaciones empresariales, aprovecharon la debilidad de los partidos para ponerse al frente del movimiento en contra de Chávez. A partir de 2006 pareciera que progresivamente los partidos vuelven al centro de la vida política si bien su agenda se ve muy condicionada por unos medios de comunicación privados que, ante la debilidad de los primeros, ocuparon su espacio, en particular durante el período 2001-2004, y actuaron como partidos.

NATURALEZA Y MECÁNICA DEL RÉGIMEN

Como señalamos, el régimen *chavista* incorpora elementos de la vieja izquierda, pero también otros populistas, militaristas y bolivarianos. De ahí que resulte tan complicado clasificarlo. Dada la proveniencia del mundo militar de Chávez, no es extraño que muchos (ex) miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente cuadros medios (comandantes, mayores, capitanes, tenientes) se sumen al proyecto liderado por el ex teniente-coronel. También sectores de la minoritaria izquierda radical que en los años sesenta habían confrontado a las élites democráticas, optando en algunos casos por la lucha armada. A tales grupos también se sumarán sectores de los partidos del *status quo* vigente durante décadas. Por tanto, se creará una coalición cívico-militar heterogénea de apoyo al régimen *chavista*. No obstante, aunque algunas personalidades moderadas, ciertos oportunistas y otros grupos desencantados con la trayectoria del régimen a lo largo de los años se separarán y, en algunos casos, se pasan a la oposición, los dos

elementos básicos de la coalición permanecerán en el tiempo: militares y sectores de la vieja izquierda. De hecho, estos últimos, al radicalizarse el proceso, adquieren mayor protagonismo.

No es, por tanto, un régimen socialista. El caso venezolano se entiende mejor recurriendo al discurso y las prácticas populistas como señalamos al inicio de este trabajo. En primer lugar, los *chavistas* han impulsando una visión dicotómica y maniquea de la realidad social: amigo-enemigo, pueblo-oligarquía, nación-imperio, ricos-pobres, etc. Además, desde el año 2002, tras el fallido golpe de Estado impulsado por una oposición muy vinculada con Estados Unidos, la *revolución* se denominará antiimperialista. La emancipación social también es otra característica importante, construyéndose al efecto un imaginario redentor en el que Chávez crea un vínculo emocional con los sectores populares (Arenas y Calcaño 2000). Además, se opta por un estilo confrontador con los sectores de oposición (clases media y alta, grupos económicos, jerarquía eclesiástica), considerados la oligarquía del país, los “lacayos” del imperialismo. Igualmente, el Presidente fomentará la antipolítica en una situación de crisis profunda de las identidades partidistas. Como mencionamos, hasta el año 2007 no creará un partido, el PSUV, y ello por la necesidad de cohesionar sectores que apoyan la “revolución” para profundizar los cambios.

Por otro lado, en la esfera económica ha combinado la aplicación de medidas ortodoxas con un elevado grado de regulación e intervención estatal, esto último de manera clara a partir del año 2003, separándose, por consiguiente, en ciertos aspectos del populismo clásico. Por último, deben destacarse algunos aspectos de la comunicación política, esenciales para entender la relación líder-seguidores. El Programa dominical de radio y televisión “Aló Presidente” ha sido fundamental durante muchos años para cimentar un vínculo entre Chávez y los sectores populares. Además, éste ha recurrido a las cadenas presidenciales —emisiones que deben transmitir de modo simultáneo todas las estaciones de radio y canales de televisión— cuando ha necesitado contrarrestar a los medios opositores o simplemente hacer propaganda de determinadas acciones. Es más, las campañas de marketing y

propaganda electoral han sido básicas para divulgar, y distorsionar, la gestión de gobierno, señalar objetivos y fortalecer la identificación Chávez-revolución-pueblo. La polarización política también se ha reflejado en los medios de comunicación públicos y privados, los cuales han servido como caja de resonancia de las demandas e intereses de unos y otros respectivamente.

El objetivo inicial del chavismo era instaurar una “Democracia protagónica y participativa” pero en la práctica se ha establecido un *régimen híbrido*. Esto es, un sistema que combina elementos democráticos con prácticas autoritarias (Diamond 2002). Dependiendo de la coyuntura política, unos han tenido más peso. No obstante, como señalamos, aunque las elecciones han cumplido los estándares internacionales, las violaciones del marco constitucional y la concentración del poder son tan graves en algunos casos que el sistema pareciera deslizarse hacia un autoritarismo electoral (Schedler 2006) o un autoritarismo competitivo (Levitsky y Way 2002).

En efecto, una de las características principales del régimen político venezolano en la actualidad es el grado de concentración y personalización del poder. Asistimos a una exacerbación del presidencialismo y del protagonismo de un líder carismático y mesiánico. Ello obedece tanto a factores institucionales, que otorgan muchos poderes al Presidente, como a su voluntad política. La toma de decisiones también está muy centralizada en el Ejecutivo. Chávez es considerado un liderazgo providencial. De ahí que sus colaboradores se limiten en la gran mayoría de los casos a decir “ordene mi Comandante”. La concentración y centralización del poder se complementa con la utilización de mecanismos paralelos a la administración pública *tradicional* para actuar con mayor rapidez dada la ineficacia de ésta pero también para sortear bloqueos por parte de grupos y sectores opositores presentes en determinadas departamentos e instituciones públicas.

La preponderancia del Poder Ejecutivo frente a otros poderes y la falta de contrapesos es más que evidente. Aunque la Asamblea Nacional (AN) está en manos del oficialismo desde las elecciones de 2005, des-

de comienzos del actual período *chavista* han sido constantes las dificultades que ha encontrado debido al contexto político y las acciones del oficialismo. Así se entiende, por ejemplo, que la AN le haya otorgado poderes especiales en tres ocasiones al Presidente (1999, 2000 y 2007) para que legisle en un amplio número de materias mediante Ley Habilitante — hasta 1998 sólo se otorgaba para cuestiones económico-financieras —. Por su parte, el Poder Judicial se caracteriza por la falta de independencia y autonomía. Algunas de las reformas realizadas en los últimos años han ido en la dirección de seleccionar magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) conforme a su lealtad con el “proceso”. El índice de Transparencia Internacional, que mide la percepción sobre la corrupción, puede ser un buen indicador de la falta de independencia de la justicia en el país. En el año 2008, Venezuela aparecía en el puesto 158 (de 180 países)³.

El nuevo Poder Ciudadano, ejercido por el Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor de la República, dista también de ser un poder autónomo. Los *chavistas* con el fin de limitar al máximo la partidización de tales órganos del Estado idearon unos Comités de Postulaciones. Además, éstos eran acordes con el nuevo tipo de democracia que deseaban implantar. Sin embargo, la experiencia de estos años ha mostrado que una cosa es la teoría y otra la práctica. Algunos trabajos (Alvarez 2003; Salamanca 2004) han mostrado cómo la designación de candidatos acaba siendo pro-gubernamental. No es de extrañar, por tanto, que el trabajo de quienes acceden a dichas instituciones sea cuestionado desde el comienzo por un porcentaje importante de la población. Algo parecido sucede con el quinto de los poderes, el Poder Electoral, que es ejercido por el Consejo Nacional Electoral (CNE). También es muy dependiente del Ejecutivo. El último nombramiento de su directiva se realizó en abril de 2006. Desde entonces, la correlación de fuerzas de 4

³ Obtiene una puntuación de 2,33 frente al 1,9 de 1998. Véase http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/cpi2008/cpi_2008_table.

a 1 a favor del oficialismo se ha mantenido. Obviamente, ello ha repercutido en la credibilidad de las actuaciones de este órgano, aunque los magistrados hayan adoptado en algunas coyunturas electorales ciertas decisiones para generar confianza.

En un sistema como el descrito, la baja rendición de cuentas del Ejecutivo es una característica dominante. Debido a que los controles son muy débiles o inexistentes, se ha producido un aumento de la corrupción administrativa que está muy relacionado con el elevado ingreso petrolero recibido en los últimos años, el incremento de la jurisdicción estatal, el aumento de la burocracia y una marcada tendencia a la patrimonialización del Estado.

RECENTRALIZACIÓN DEL PODER Y EMPODERAMIENTO DE LAS COMUNIDADES

Otro rasgo a destacar en el actual período es la doble dinámica consistente en la recentralización del poder en el gobierno central, obviando en muchos casos las atribuciones de los estados y municipios, y la transferencia de poder y recursos a las comunidades.

Conviene subrayar que en 1989 se inició la descentralización con la elección directa de gobernadores y alcaldes. Este proceso se convirtió en uno de los ejes de la transformación del Estado con el fin de profundizar la legitimidad del sistema, expandir los canales de participación y representación, mejorar la eficacia de la gestión pública y acercar las decisiones a la población. Durante sus primeros diez años 1989-1998 contribuyó a la relegitimación de los poderes estatales y locales y a la introducción de nuevas dinámicas en el sistema político. Asimismo, facilitó el surgimiento de nuevos liderazgos regionales y locales. También se produjeron avances en el traspaso de competencias a los niveles subnacionales de gobierno aunque paralelamente no se realizó una reforma fiscal que permitiera, sobre todo a los estados, totalmente dependientes de las transferencias del Gobierno central. Aunque el proceso descentralizador fue desordenado y presentó muchas fallas en la coordinación, se observaron avances en la gestión, las infraes-

estructuras y la calidad de los servicios (Mascareño 2000). Igualmente, la descentralización también dio cabida a la participación del sector privado y las organizaciones sociales, en particular las comunitarias. A pesar de todo lo anterior, el alcance del proceso descentralizador fue limitado debido a sus restricciones intrínsecas y a desarrollarse durante los años noventa, muy marcados por las dificultades socioeconómicas y el aumento de las tensiones y los problemas sociopolíticos.

La victoria de Hugo Chávez en las elecciones de 1998 supone un punto de inflexión. Entonces era evidente la necesidad de introducir ciertos cambios para otorgar mayor coherencia y profundizar la descentralización. Sin embargo, el proyecto de la nueva élite cívico-militar era centralista, a pesar de ciertos compromisos asumidos y plasmados en el nuevo texto constitucional. Así, se enuncia un “federalismo descentralizado” que en la práctica no modifica sustancialmente el centralismo de la Constitución de 1961 (Brewer-Carías 2000). Es cierto que se incorpora al texto constitucional la elección directa de alcaldes y gobernadores. También se prevén algunas instancias de cooperación intergubernamental (el Consejo Federal de Gobierno) y varios instrumentos financieros, algunos de los cuales requerían de la aprobación de la correspondiente normativa legal. No obstante, entre otros cambios, conviene subrayar un par de aspectos contrarios a una auténtica descentralización: la creación de un poder legislativo unicameral (suprimiéndose consiguientemente el Senado) y la sujeción de algunos aspectos organizativos de los gobiernos regionales y locales a una ley nacional, esto último claramente violatorio de su autonomía (Brewer-Carías 2000: 56). Por su parte, los municipios son fortalecidos: a las competencias exclusivas que tenían se suman otras hasta entonces ejercidas de modo concurrente con los estados como la atención primaria en salud, educación preescolar y actividades deportivas. Asimismo, se les concede algún nuevo tributo y mejoran su participación en los ingresos de los estados. Por último, se prevén dos instrumentos de planificación y coordinación de políticas públicas sub-nacionales en los que también participarán representantes de la sociedad civil organizada: los Consejos Estadales y Locales de planificación.

La falta de respaldo al proceso descentralizador se manifestará en el impulso de mecanismos dependientes del Ejecutivo paralelos a las gobernaciones para la aplicación de ciertas medidas, por ejemplo el Plan Bolívar 2000 o determinados programas sociales. Otro ejemplo claro al respecto es el manejo por el Ejecutivo del excedente petrolero al margen de los estados y municipios que no se han beneficiado dado que el Ejecutivo ha recurrido a una argucia legal para dejarles al margen. Asimismo, no se ha desarrollado el programa constitucional: el Consejo Federal de Gobierno no está operativo -sólo se activó en una ocasión por circunstancias excepcionales, ajenas a los fines para los que fue creado-. Igualmente, se ha bloqueado la aprobación de la normativa para que las regiones cuenten con una hacienda propia, se ha paralizado los traspasos de competencias y, en ciertos casos, el Ejecutivo ha reasumido otras (por ejemplo, salud). Todo lo anterior, se ha traducido en una pérdida de importancia de la participación de los ingresos territoriales de estados y municipios en el ingreso público nacional (Mascareño 2005: 154-156). Se ha roto así con el laborioso consenso alcanzado en la etapa anterior. Es obvio que la élite gobernante no desea contrapesos territoriales como los que pueden representar los estados. Además, la implantación de un hipotético modelo socialista fortalece la visión centralizadora del *chavismo* aunque ello no impida trasladar ciertas funciones y corresponsabilizar a las comunidades locales en la ejecución de ciertas medidas.

En efecto, se ha producido un *empoderamiento* de las comunidades locales. *El Socialismo del Siglo XXI* defiende una democracia “protagónica y revolucionaria” en la que estados y municipios, en particular los primeros, pierden poder y recursos frente a las comunidades. La nueva estructura es todavía incipiente y busca además alterar el actual mapa socio-territorial del país. Aunque el modelo es confuso, en líneas generales se apuesta por un desarrollo territorial desconcentrado, cediendo más cuotas de poder y recursos a las comunidades.

En principio, se busca que las comunidades se corresponsabilicen en la gestión de las políticas públicas con el fin de enfrentar los graves problemas que les aquejan. Adicionalmente, estas comunidades serían

el cemento indispensable para la construcción de otra sociedad y de un nuevo modelo sociopolítico. Si bien antes de 1999 se habían desarrollado algunas experiencias participativas de interés, lo que cambia durante la actual etapa es su generalización y la intencionalidad política que se persigue. Las formas organizativas por excelencia que se han impulsado en los últimos tres años han sido los Consejos Comunales (CC). En teoría éstos deberían participar en las distintas fases de las políticas públicas que les afectan; en la práctica, se han convertido en organizaciones que solicitan fondos, generalmente al Estado, para desarrollar múltiples proyectos comunitarios. Además, se pretende que articulen diversas organizaciones comunitarias (comités de trabajo, mesas técnicas, etc.), algunas de las cuales existían con anterioridad en algunas zonas del país. A finales de 2007 se calculaba que existían unos 35.000 consejos comunales⁴

Aunque las experiencias de los consejos comunales son muy variadas, éstas no parecieran ir en la dirección de una democracia participativa y tampoco son consistentes con los planteamientos de un mayor traslado de poder real al pueblo. Con todo, algunas innovaciones participativas han coadyuvado al auto-desarrollo y autogestión de las comunidades, a pesar de los múltiples problemas que enfrentan en contextos socioeconómicos poco favorables (López Maya 2007: 448-451). Los CC también han contribuido a amortiguar ciertos problemas y sortear ineficiencias de las administraciones públicas. Por tanto, en algunos casos podrían coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y la calidad de la democracia a partir de los procesos de deliberación y toma de decisiones. No obstante, existen muchas dudas sobre su eficacia y la gestión de recursos debido a que su tamaño les impide resolver problemas que requieren de una coordinación supra-comunitaria. Además, muchos de estos Consejos han sido creados improvisadamente, y se les ha sobrecargado de funciones. A ello

⁴ *Últimas Noticias*, Caracas, 21 de diciembre de 2007, pág. 16.

debe añadirse la falta de formación de muchos ciudadanos para desempeñar las nuevas tareas. Por último, los CC son dependientes del poder Ejecutivo, instancia que los registra y otorga financiación para proyectos.

Hasta la fecha, los CC responden a un proceso “top-down” ya que se han impulsado desde el Gobierno, el cual ha desplegado una estrategia conducente a la incorporación de organizaciones y movimientos populares al Estado socialista. En ese sentido, se consideran instancias básicas del “poder popular” que todavía se manifiesta de una forma muy embrionaria. Durante el último año, el Presidente ha insistido en la necesidad de que las autoridades *chavistas* impulsen la constitución de comunas socialistas. Estas organizaciones sociales dentro de los municipios estarían integradas por diversos consejos comunales y unidades productivas. Se pretende éstas sean el elemento vertebrador comunitario de un nuevo modelo productivo socialista.

ALCANCES Y LÍMITES DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

No es posible en un trabajo de estas características abordar las múltiples acciones del Ejecutivo durante la etapa actual. En su lugar, describiremos algunas de las políticas más significativas y los rasgos más importantes del modelo de desarrollo en curso.

En materia económica se advierten dos grandes períodos. El primero (1999-2002) está caracterizado por la ausencia de un plan económico creíble, la defensa de una económica social en el marco de un sistema capitalista (República Bolivariana de Venezuela 2001) y la interferencia en la gestión del Ejecutivo de hechos sociopolíticos mencionados en otra sección. Durante esta fase, se combinan medidas ortodoxas y populistas para enfrentar la fuerte caída de los ingresos por exportaciones petroleras y la grave situación socioeconómica de amplios sectores de la población. Las fluctuaciones del ingreso petrolero condicionan la gestión macroeconómica que arroja pobres resultados. El segundo período se inicia en 2003 tras el fallido paro económico-petrolero impulsado por sectores de la oposición, el cual obliga al

Ejecutivo a imponer controles de cambio y precios. El notable aumento del ingreso fiscal petrolero y el incremento de la recaudación de impuestos fomentan la actividad económica muy dependiente del gasto público. Además, se instrumentan acciones monetarias y cambiarias favorables a la estabilidad económica, la extensión del crédito y el mantenimiento del flujo de divisas. Durante esta segunda etapa se amplían los controles, las regulaciones económicas y se fortalece el Estado en su vertiente empresarial (Guerra 2007). Junto con ello, se apuesta por un cambio en la estructura socioeconómica del país, esto es, por construir un modelo socialista productivo. Durante este período, la gestión macroeconómica muestra algunos resultados positivos, aunque persisten problemas como la inflación. Por otro lado, no hay evidencias de que se esté estableciendo un nuevo modelo de desarrollo alternativo al capitalismo.

Varias intervenciones y acciones públicas merecen cierta atención. En primer lugar, la política petrolera. Al efecto, el *chavismo* ha intentado maximizar el ingreso petrolero. Los acuerdos en el seno de la OPEP, en parte impulsados por Chávez, y una mayor demanda internacional a partir del año 2003 han contribuido a ello. Segundo, el Gobierno ha puesto límite a la aportación fiscal decreciente de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Ahí han sido fundamentales los cambios impositivos en el negocio petrolero y la reversión de la apertura petrolera iniciada durante la década de los noventa del siglo XX. En su lugar, el Ejecutivo ha impulsado las empresas mixtas, en las que PDVSA es mayoritaria. Por último, el petróleo ha sido utilizado como un instrumento fundamental en la política exterior (sobre esto último, volveremos más adelante).

El petróleo es esencial para la suerte del país. Cuando Chávez llegó al poder, el precio del barril venezolano se situaba por debajo de los 10 dólares. En la primera quincena de julio de 2008 superó los 122 dólares, si bien a partir de entonces ha conocido una caída muy fuerte como consecuencia de la desaceleración de la economía internacional. En todo caso, el valor promedio/ año ha sido bastante alto en los últimos años (\$ 45,39 en 2005, 56,45 en 2006, \$ 64,74 en 2007 y \$100 du-

rante los primeros seis meses de 2008. El Gobierno central ha ingresado unos 162.550 millones de dólares de unos ingresos totales superiores a los 325.000 millones de dólares recibidos por el país durante el mismo período. En el año 2007, los ingresos petroleros supusieron el 50,6% de los ingresos totales del Gobierno central. Además, representaron más del 90% del total de las exportaciones (Banco Central de Venezuela 2008: 209).

A partir de lo señalado, es obvio que la élite *chavista* ha exacerbado el modelo rentista petrolero para favorecer el desarrollo de su proyecto político e impulsar algunas transformaciones en el país. En lo fundamental, el ingreso petrolero se ha utilizado, como señalamos, para impulsar el gasto público, que a la postre se ha convertido en el motor de la actividad económica. Después de unos primeros años bastante magros en resultados, la economía ha crecido a un ritmo sostenido y significativo a partir del año 2004, con tasas superiores al 10% en algunos años. Durante los primeros 9 meses del año 2008 la economía dio muestras de desaceleración ya que creció un 5,6%⁵.

La expansión económica de los últimos años ha tenido una repercusión positiva en la evolución del empleo, los salarios, la reducción de la pobreza y la informalidad. Así, por ejemplo, la tasa de desempleo se redujo del 16,8% al 7,5% durante el período 2004-2007. Es probable que a dicha reducción hayan contribuido los subsidios, las becas otorgadas por el Ejecutivo y el elevado incremento del empleo público. Los ingresos de las familias han aumentado de manera desigual pero los sectores humildes se han beneficiado no sólo de las transferencias del Gobierno sino también de los aumentos de los salarios mínimos y de las subidas de los sueldos en el sector público, muy por encima, al menos hasta 2008, de los del sector privado si descontamos la inflación (Vera 2008). Esos aumentos han tenido una modesta repercusión en la distribución del ingreso entre los asalariados (el coeficiente Gini pasó del 0,49 en 1er. trimestre 1998, al 0,42 en 1er. Trimestre 2007). La

⁵ Los datos económicos provienen del Banco Central de Venezuela (www.bcv.org.ve).

informalidad aunque se mantiene alta también ha conocido un significativo descenso (44,1% en 2007 frente a 52,7% en 2003).

Asimismo, la pobreza se ha reducido de manera considerable, si bien no lineal. Los hogares pobres representaban el 27,5% de total en el primer semestre de 2007 frente al 42,8% de 1999. Por su parte, la pobreza había disminuido del 16,6% en 1999 al 7,6% en 2007 (primer semestre). Mientras el oficialismo atribuye la reducción de la pobreza a la actividad económica y los programas sociales ejecutados, algunos estudiosos y críticos dudan de la efectividad de las medidas y, en todo caso, los avances los relacionan con el positivo ciclo petrolero (España 2008). Sin embargo, la mejora en varios de los indicadores señalados no se ha traducido en un cambio sustantivo del país en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el PNUD. Ahora bien, según la metodología utilizada por el Ejecutivo, tan proclive a los cambios en las estadísticas, Venezuela se ubicaría en la zona de desarrollo alto durante el período 2004-2006⁶

Las misiones sociales

Las intervenciones en el área social han proporcionado al Ejecutivo importantes réditos políticos e ideológicos entre los sectores populares. Aunque durante los primeros años, más allá de algunas acciones puntuales, éste hizo poco al respecto, a partir del año 2003, con motivo de la celebración de un referéndum revocatorio presidencial, el Gobierno tomó la iniciativa y puso en marcha un conjunto de programas sociales. Las denominadas misiones sociales, se idearon, por tanto, en una coyuntura político-electoral pero posteriormente se han mantenido dada la autonomía, flexibilidad y rapidez que proporciona a sus ejecutores ya que las instrumentaliza al margen de la administración pública tradicional. Si bien en el pasado otros gobiernos habían ejecu-

⁶ La información de los indicadores sociales ha sido tomada del “Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela” elaborado por el Ministerio de Planificación y Desarrollo (<http://www.sisov.mpd.gob.ve/home/index.php>).

tado algunos de dichos programas, lo distintivo durante el período *chavista* es su carácter masivo, no focalizado y variado con el fin de paliar, así sea parcialmente, la enorme deuda social acumulada. Hasta finales de 2007 se habían creado alrededor de treinta misiones sociales. Por la financiación recibida, la movilización de recursos humanos, el número de ciudadanos beneficiados y la trascendencia pública, las misiones más importantes han sido las del área de salud, educación, alimentación, formación y empleo así como vivienda (D'Elia 2006).

En teoría, las misiones se ajustan a varios de los objetivos del proyecto oficialista, entre otros: inclusión e igualdad social, democracia participativa y protagónica y nuevo modelo de desarrollo endógeno. Al menos hasta fechas recientes, los sectores populares tenían una percepción positiva sobre su impacto. Ahora bien, en términos técnicos son muy difíciles de evaluar debido a la escasez de datos y en ocasiones a la falta de sistematización de la información dado el elevado número de organismos involucrados. Además, con el transcurso del tiempo han aflorado diversos problemas que enfrentan como la improvisación, ineficacia, el descontrol o la corrupción. Esto último se ve muy favorecido por una característica ya señalada: su ejecución mediante estructuras paralelas, ya mencionadas, de ahí que sea difícil controlar los fondos e identificar los gastos. En todo caso, al margen de sus problemas y de las dudas sobre su eficacia (Rodríguez 2008), han tenido un importante papel en términos paliativos.

¿Un nuevo modelo de desarrollo productivo?

Desde el acceso al poder, la radicalización de los objetivos políticos del *chavismo* ha repercutido en el modelo de desarrollo a implantar. Desde el otoño de 2004, y en particular tras la reelección de Chávez en diciembre de 2006, la apuesta de las élites es un modelo productivo socialista. Más allá de objetivos teóricos (República Bolivariana de Venezuela. Presidencia 2007: 3-4), en la práctica sus dos principales características han sido las siguientes: i) fuerte presencia del Estado en la economía, ii) impulso de formas económicas alternativas: Empresas

de Producción Social (EPS)⁷, cooperativas, núcleos de desarrollo endógeno y la cogestión.

La mecánica que se observa hasta la fecha es la siguiente: El Estado se encarga de actividades productivas consideradas estratégicas y presta servicios básicos. Debido a la fortaleza del Petroestado en los últimos años, las dependencias y empresas estatales contratan con EPS y cooperativas. Por último, el Estado forma a trabajadores que luego se incorporan a diversas formas económicas alternativas. Al efecto algunas misiones juegan un papel importante.

El *nuevo* modelo productivo no constituye una alternativa sostenible en el tiempo dada su excesiva dependencia del ingreso petrolero. Además, incorpora trabajadores poco cualificados y se caracteriza por bajos niveles tecnológicos y de innovación. Asimismo, coexiste con un sector informal “hipertrofiado” y un sector industrial en decadencia. Por último, es un modelo escasamente productivo hasta la fecha (Vera 2007). Ese es justamente su reto.

El giro en política exterior

En política exterior se ha producido una ruptura en temas sustanciales con respecto a la etapa de Punto Fijo. La nueva acción internacional del país está muy influida por el protagonismo de Hugo Chávez. Además, el Ejecutivo ha extremado el uso de la renta petrolera y la energía para establecer alianzas internacionales. Al respecto, ha sido fundamental el reforzamiento de vínculos con algunos países de la

⁷ En teoría, según se indica en el “Proyecto Nacional Simón Bolívar”, las EPS son “entidades económicas dedicadas a la producción de bienes o servicios en las cuales el trabajo tiene significado propio, no alineado y auténtico, no existe discriminación social en el trabajo y de ningún tipo de trabajo, no existen privilegios en el trabajo asociados a la posición jerárquica, con igualdad sustantiva entre sus integrantes, basadas en una planificación participativa y protagónica” (República Bolivariana de Venezuela 2007: 20).

OPEP, que le han permitido, por ejemplo, alcanzar acuerdos sobre producción. Quizás sea en esta área una en las que mejor se aprecia el componente ideológico radical de izquierdas de la élite gobernante: orden internacional multipolar, anti-imperialismo y apoyo a mecanismos de cooperación anticapitalista en Latinoamérica. Además, el oficialismo desea exportar este modelo a otros países de la región (Romero 2007). No obstante, las acciones radicales se han combinado con elevadas dosis de pragmatismo en temas económicos clave.

Las relaciones con algunos países merecen cierta atención. El aliado tradicional, Estados Unidos, ha dejado de serlo en términos políticos. De hecho, en los últimos años las malas relaciones ha sido la tónica dominante. Los diferentes intereses y agendas así como los distintos liderazgos presidenciales que representan Bush y Chávez son factores que explican muchos de los enfrentamientos. Así, desde los inicios de la actual etapa *chavista*, Venezuela ha buscado desplegar una política más autónoma. Además, el respaldo del Gobierno de Estados Unidos a la oposición en el fallido golpe de Estado de 2002 ha contribuido a empeorar el clima político bilateral. Asimismo, influye la retórica anti-imperialista y anti-neoliberal de Chávez y las visiones contrapuestas en la formación de alianzas y establecimiento de vínculos con actores internacionales. Así, el presidente venezolano se ha aproximado a países enemistados con Estados Unidos o que pueden hacerle de contrapeso y también con movimientos y organizaciones político-sociales progresistas, que en muchos casos también son *antiestablishment*. Por último, se han producido diferencias sobre la integración regional, la cooperación militar y la seguridad. Pero esas malas relaciones políticas no se han trasladado al plano comercial. En ese ámbito ha imperado el pragmatismo. Venezuela exporta alrededor de 1,1-1,2 millones de barriles por día. A cambio, gran parte de las importaciones de bienes y servicios provienen del “Imperio”. La interdependencia, por tanto, es clara y de momento no parece que vaya a cambiar, aunque los discursos oficiales y algunos gestos muestren el deseo de reducirla. Habrá que esperar qué sucede con un nuevo inquilino en la Casa Blanca.

En materia de cooperación e integración regional, el chavismo ha realizado algunas propuestas con una fuerte impronta ideológica. Al respecto, la principal iniciativa ha sido la Alternativa Bolivariana para América y el Caribe (ALBA, hoy denominada Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) que surge en 2004 como una alternativa al ALCA. En la práctica, no ha pasado de ser un proyecto de cooperación de Venezuela con varios países de la región (Cuba, Nicaragua, Bolivia, Dominica y Honduras). Hasta ahora, el tema energético ha dominado la agenda del ALBA. Se estima que Venezuela ha destinado unos 30.000 millones de dólares a contratos, acuerdos, donaciones y memorandos. Los países más beneficiados han sido Cuba y Bolivia.

La energía también ha sido utilizada para forjar alianzas con varios países latinoamericanos. La propuesta que mayor desarrollo ha alcanzado ha sido Petroamérica (2005), que a su vez engloba tres iniciativas: Petrocaribe, Petroandina y Petrosur. Petrocaribe es el esquema más desarrollado y hasta la fecha se ha traducido principalmente en el suministro de petróleo venezolano a más de una quincena de países que se benefician de buenas condiciones de pago. Por el contrario, la idea de construir un Gasoducto del Sur (2006) no ha tenido éxito. Además de las reticencias de algunos países por las relaciones de dependencia que podían crearse, los costes, las dificultades técnicas o la rentabilidad, por no hablar de los riesgos ambientales, han paralizado el proyecto.

Otro aspecto a destacar es el giro estratégico que ha dado el país en América del Sur. En primer lugar, conviene destacar la apuesta por el MERCOSUR. Una incorporación rápida que se hizo prácticamente sin consultas. Aunque la adhesión se realizó en junio de 2006, el país no es todavía miembro de pleno derecho ya que está pendiente la ratificación por los parlamentos brasileño y paraguayo. A su vez, Venezuela ha abandonado la Comunidad Andina de Naciones (anunciada en abril de 2006), debido a los problemas existentes en el bloque y quizás las dificultades que planteaba compatibilizar la pertenencia a dos esquemas de integración, y del G-3 (del que también formaban parte

Colombia y México). Segundo, el país ha respaldado la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Esta organización liderada por Brasil se ha dotado de un marco institucional en el que predominan los acuerdos intergubernamentales. Entre sus objetivos, destacan el desarrollo de proyectos energéticos, de infraestructuras y comunicaciones. Se ha dotado de un marco institucional en el que predominan los acuerdos intergubernamentales. En el momento de redactar este trabajo, estaba pendiente la creación de un Consejo de Defensa Suramericano, “bloqueado” ante la diferencias entre varios de sus miembros sobre la seguridad regional.

De las relaciones con los países latinoamericanos, cuando menos debe mencionarse la alianza con Cuba y los nexos con Colombia. En el primer caso, los vínculos están basados en la buena sintonía existente entre Castro y Chávez así como en el apoyo e intercambios mutuos entre los dos países. De los acuerdos firmados entre ambos países, destaca la exportación de 100.000 barriles de petróleo venezolano por día a precios preferenciales. Por su parte, Cuba envía mano de obra cualificada que desempeña una importante labor en las mencionadas misiones sociales y otorga apoyo técnico en diversos proyectos. También debe tenerse en cuenta el convenio del ALBA que ha facilitado la creación de empresas mixtas. Respecto a Colombia, las relaciones políticas y diplomáticas han sido especialmente difíciles en los últimos tiempos. Al igual que en el caso estadounidense, han influido mucho los diferentes liderazgos de Chávez y Uribe así como las agendas e intereses que éstos defienden. Entre los temas conflictivos destacan el Plan Colombia, el ALCA, el Tratado de Libre Comercio Colombo-Estadounidense, las extensas fronteras comunes y las FARC. Pero, al igual que en el caso de Estados Unidos, el comercio no se ha resentido debido a los vínculos existentes entre ambos países. En el año 2007, Colombia constituyó el principal destino de las exportaciones petroleras venezolanas (1.688 millones de dólares, 27,1% del total) y el segundo socio en importancia, tras EE. UU., en cuanto a las importaciones (5.671 de dólares, 15% del total) (Banco Central de Venezuela 2008: 189, 192).

Fuera de Latinoamérica, varios aspectos pueden subrayarse. En primer lugar, el desarrollo de una serie de alianzas a partir de 2004 con las que se pretende construir un eje alternativo a lo que representa Estados Unidos. En términos generales, las alianzas son de dos tipos: las ideológicas establecidas con Irán, Rusia, Siria y Bielorrusia. Con estos países Venezuela ha firmado acuerdos muy variados (energía, infraestructura, alimentación, etc.). A éstas se suman acuerdos estratégico-comerciales que pretenden diversificar los intercambios (China, Vietnam y Malasia). Segundo, con la Unión Europea se ha establecido un *modus vivendi* al prevalecer los intereses económicos y comerciales por encima de las posibles diferencias sobre los acontecimientos en el país (Romero 2007). Por último, Venezuela ha incrementado su presencia en África, en el contexto del fortalecimiento de las relaciones Sur-Sur.

CONSIDERACIONES FINALES

Lo expuesto en las secciones anteriores forma parte de un trabajo en curso. Por tanto, más que extraer conclusiones definitivas pareciera más apropiado realizar unas breves reflexiones finales. Ante todo, conviene subrayar que el Gobierno de Hugo Chávez no es de izquierdas en sentido estricto. Incorpora algunos elementos que generalmente se adscriben a la izquierda como la atención a la cuestión social y el antiimperialismo pero, como hemos subrayado en páginas anteriores, también reúne otros populistas, autoritarios, democráticos y militaristas. Por otro lado, de las influencias de izquierda, pesan más aquellas que pertenecen a movimientos que jugaron cierto papel décadas atrás y que poco o nada se han renovado. A partir de lo investigado, quizás sea más apropiado caracterizarlo como un neopopulismo. De hecho, no hemos encontrado evidencias de que se esté construyendo un modelo socialista democrático novedoso. Es cierto que se han producido ciertas innovaciones en el ámbito local pero, en su mayor parte, el modelo exhibe unos rasgos que recuerda a experiencias socialistas fracasadas: estatismo, burocratismo, centralismo y excesivo culto a la personalidad del líder.

El gobierno *chavista* arroja más sombras que luces, casi diez años después de llegar al poder si nos atenemos a la calidad de gobierno, el respeto a los derechos y las libertades y la gestión socioeconómica. La denominada “democracia protagónica y participativa” dista de haberse concretado aunque se hayan desarrollado mecanismos de *empoderamiento* y el ciudadano común sienta que tiene más posibilidades de expresar su opinión que antes, por más que en la mayoría de las ocasiones sea el “Comandante” quien decida qué debe hacerse. Lo anterior nos lleva a subrayar que el régimen actual es un híbrido, con rasgos autoritarios y características democráticas. Institucionalmente, el sistema es muy débil y las principales decisiones están muy centralizadas en el ámbito nacional y, en particular, en manos del presidente y su equipo. Asimismo, aunque se han producido ciertos avances socioeconómicos al calor del elevado ingreso petrolero recibido por el país, que sin duda han beneficiado a los sectores populares, por otro lado, se han agravado ciertos rasgos provenientes del pasado como la improvisación, la discontinuidad administrativa, la ineficiencia, la corrupción, el clientelismo y la patrimonialización del Estado. Todos estos factores unido a lo señalado con anterioridad nos lleva a dudar de la viabilidad de este modelo sociopolítico a medio plazo en caso de una abrupta caída de los precios del petróleo. También suscita muchos interrogantes su posible exportación debido a las particularidades del caso, por más que deba reconocerse su influencia en algunos gobiernos y movimientos en la región.

El caso venezolano es complejo, contradictorio y *sui generis*. Además, va a contracorriente de otras experiencias progresistas en Latinoamérica. En su etapa actual, el Ejecutivo encuentra muchos problemas para avanzar en la construcción de un nuevo modelo político por errores, omisiones y, también, por encontrar una significativa oposición social. No hay duda que la cultura política democrática heredada del período anterior a 1999 ha actuado como un freno a las ambiciones *chavistas* de radicalizar el proceso. Adicionalmente, existen serias dudas sobre la posibilidad de alterar el modelo económico rentista recurriendo a formas económicas alternativas. De hecho, ninguna de éstas

muestra resultados satisfactorios en términos de productividad. Por último, conviene destacar las tensiones inherentes al proceso de transformaciones: los acontecimientos de años recientes muestran lo difícil que resulta impulsar cambios radicales en el marco de la Constitución de 1999. De ahí que sean frecuentes las violaciones del orden jurídico institucional y de los valores que dicen defienden los *chavistas*. A tenor de los acontecimientos ocurridos a partir del año 2007, el país pareciera deslizarse hacia un *autoritarismo competitivo*. No obstante, habrá que esperar. Las próximas elecciones regionales y locales de 2008 podrían arrojar mayor evidencia al respecto.

REFERENCIAS

Alvarez, A. (2003), "La reforma del Estado antes y después de Chávez", en S. Ellner y D. Hellinger (eds.), *La política venezolana en la época de Chávez. Clases, polarización y conflicto*. Caracas: Nueva Sociedad.

Arenas, N. y Gómez Calcaño, L. (2000), "El imaginario redentor: de la Revolución de Octubre a la Quinta República", Caracas: Cendes, Temas para la discusión, serie arbitrada.

Banco Central de Venezuela (2008), *Informe Económico 2007*, Caracas: BCV.

Brewer-Carías, Allan R. (2000), *La Constitución de 1999*. Caracas: Editorial Arte.

Conniff, M. L. (2003), "Neopopulismo en América Latina. La década de los 90 y después", *Revista de Ciencia Política*, Santiago de Chile, vol. 23(1): 20-31.

Corrales, J. y Penfold-Becerra, M. (2007), "Venezuela: Crowding out the Opposition", *Journal of Democracy* 18 (Abril): 99-113.

Diamond, L. (2002), "Thinking about Hybrid Regimes", *Journal of Democracy* 13 (2): 21-35.

D'Elia, Y. ed. (2006), *Las misiones sociales en Venezuela: una aproximación a su comprensión y análisis*, Caracas: ILDIS.

España, L. P. (2008), "Un cuarto de la cuarta", *Últimas Noticias* (Caracas), 10 de febrero de 2008, pág. 12.

Guerra, J. (2007), *¿Qué es el Socialismo del Siglo XXI?*, 2ª ed., Caracas: Librorum.

Kornblith, M. (2003), "Elecciones y representación en tiempos turbulentos", en P. Márquez y R. Piñango (comps.), *En esta Venezuela: realidades y nuevos caminos*: Caracas, IESA.

--- (2007), "Venezuela: calidad de las elecciones y calidad de la democracia", *América Latina Hoy*, nº 45: 109-124.

Levitsky, S. y Way, L. (2002), "The Rise of Competitive Authoritarianism", *Journal of Democracy* 13 (2): 51-65.

López Maya, M. (2007), "Innovaciones participativas y Poder Popular en Venezuela", *Revista SIC*, Caracas, 700: 448-451.

Mascareño, C. (ed., 2000), *Balance de la descentralización en Venezuela: logros, limitaciones y perspectivas*. Caracas: PNUD/ILDIS/Nueva Sociedad.

--- (2005), "Descentralización, re-centralización y sociedad civil", en Cendes, *Venezuela Visión Plural. Una mirada desde el Cendes*, vol. I (Caracas: bid & co editor/ Cendes, 2005).

Molina, José E. y Pérez, C. (1995), "Los venezolanos abandonan el hábito de votar. La abstención en las elecciones de 1993", *Boletín Electoral Latinoamericano*, XIII, San José de Costa Rica, IIDH/CAPEL

Pérez Baralt, C. (2000), "Cambios en la participación electoral venezolana 1998-2000", *Cuestiones Políticas* 25: 11-26.

República Bolivariana de Venezuela (2001), "Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007", Caracas: mimeo.

República Bolivariana de Venezuela. Presidencia. (2007), "Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista (PPS). Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013", Caracas: mimeo.

Rodriguez, F. (2008), "Francisco Rodríguez, "An Empty Revolution: The Unfulfilled Promises of Hugo Chávez", *Foreign Affairs* 87 (Marzo/Abril): 49-62.

Romero, C. (2007), "Venezuela: ¿Un déjà vu latinoamericano?", Caracas: mimeo.

Salamanca, L. (2004), "La democracia directa en la Constitución venezolana de 1999", en Luis Salamanca y Roberto Viciano Pastor (coord.), *El Sistema Político en la Constitución Bolivariana de Venezuela*. Caracas/Valencia: CEPS, Vadell Hermanos, IEP.

Schedler, A (2006), "The Logic of Electoral Authoritarianism", en A. Schedler, ed., *Electoral Authoritarianism*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Vera, L. (2007), "Políticas sociales y productivas en un Estado patrimonialista petrolero: Venezuela 1999-2007", *Nueva Sociedad* 215 (mayo-junio): 111-128.

--- (2008), "La nueva clase media en Venezuela", *Tal Cual* (Caracas), 15 de febrero de 2008, pág. 20.

**Números anteriores de
Documentos de trabajo
Política y Gestión**

<http://e-archivo.uc3m.es/dspace/handle/10016/587>

5/2005

Manuel Alcántara Sáez

Las cumbres iberoamericanas en perspectiva española.

6/2006

Tatyana Dronzina

El nuevo terrorismo global y sus implicaciones para los Balcanes

7/2006

Ester García Sánchez

Un concepto de actor para la Ciencia Política

8/2006

Remo Fernández Carro y Víctor Lapuente Giné

A pied-piper situation: do bureaucratic researchers produce more science?

9/2007

M. Saúl Vargas Paredes

La contribución de los partidos políticos en México o el misionero, el arquitecto y Robin Hood

10/2007

José Ignacio Cases Méndez

Reflexiones sobre las raíces del nacionalismo étnico vasco y su influencia en el proceso político

11/2007

Francisco J. Vanaclocha Bellver, Antonio Natera Peral, Ester García Sánchez

Prestige y 11-m: la vertebración política de la gestión de catástrofes

12/2008

Benjamín Méndez Bahena

Funciones de gobierno y seguridad ciudadana